

# **Debate sobre el estado de la Nación**

(12 de mayo 2005)

## **Intervención de Gaspar Llamazares**

Sr. Presidente del Gobierno, Señorías:

Acudimos a este debate sin la crispación que caracterizó los celebrados en la legislatura anterior, en un nuevo clima marcado por el respeto y el diálogo, por mucho que el PP persista artificialmente en la estrategia de la tensión, y en una Cámara que ha recuperado el protagonismo que nunca debió perder, como representación plural de la ciudadanía y como foro de libre debate político.

Este no es el debate de la nación en un modelo bipartidista, ni se agota la riqueza de puntos de vista en la reducida agenda de problemas que, a veces, caracteriza a los dos grandes partidos. La sociedad vive con problemas, ilusiones y expectativas que tienen que ver con el empleo, con el futuro de los hijos, con la calidad de la enseñanza o la educación, con los problemas de convivencia en ciudades cada vez más multiculturales. Por eso el verdadero estado de la Nación no está ni en el catastrofismo del PP, ni en la complacencia del presidente del Gobierno. Está en esta consideración global de los problemas de la ciudadanía.

Hace un año, en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, usted ordenó la retirada de tropas españolas de Irak, pese a que el Sr. Bono afirmaba que era “*imposible*” sacarlas de allí. No hacía mucho tiempo que el propio Partido Socialista estaba dispuesto a apoyar la intervención militar si el Consejo de Seguridad aprobara una resolución en este sentido.

Este ha sido un año de restauración democrática, de corrección de las políticas más conservadoras y autoritarias del PP y un año de transición presupuestaria. Un año en el que nuestro Grupo parlamentario ha contribuido a mejorar las leyes y a garantizar la estabilidad desde una oposición exigente e influyente. Ha sido un año de corrección y enmienda de las políticas más extremistas de José María Aznar en relación con la guerra, la involución en materia de derechos civiles, la instrumentación de RTVE y el desprecio a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, todo un sistema que apuntaba, no ya a una legítima alternancia, sino a un peligroso cambio de régimen.

Agotada esta fase de la legislatura, el Gobierno ha entrado en un período de ambigüedad que demuestra la indefinición de su propio proyecto político y, lo que es peor, una preocupante tendencia a aplazar las medidas socioeconómicas y fiscales que podrían acreditar la voluntad política de cambio hacia la izquierda. En pocas palabras, nos encontramos ante un Gobierno liberal en materia de derechos civiles, pero continuista en sus concepciones económicas.

La derecha española, demostrando un desconcierto todavía no superado, intenta presentar al gobierno del PSOE como de izquierda radical. Sólo desde esa óptica conservadora se pueden interpretar como radicales algunas decisiones del Gobierno en política exterior u otras que afectan a los derechos civiles. Sin embargo, en política económica el continuismo es evidente y la mejor prueba es que la derecha es incapaz de articular una propuesta económica alternativa por más que critique la del gobierno.

Lo que a nosotros nos preocupa es que hace un año usted prometía un profundo cambio en la economía, y este no se atisba por ningún lado. No deseamos un cambio por razones ideológicas, pedimos un giro que vuelva a colocar en el corazón de la economía a las gentes y sus problemas

reales. Y hay que decir con claridad y sin ambigüedades: no habrá mejor sanidad sin mayor gasto público, ni mejor enseñanza, ni una reorientación productiva y medioambiental de nuestra economía. Estamos exigiendo un giro ciudadano en la política económica.

Porque estamos convencidos de la necesidad de un giro a la izquierda, para el que existe una demanda de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Y ese giro social requiere que se establezcan unas prioridades que a lo largo de este debate iremos desgranando.

El PP, que antaño gobernó con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia i Unió, acusa hoy al Gobierno de debilidad por apoyarse en la izquierda. Esa es la grandeza de un Gobierno en minoría, que obliga al talante y al diálogo permanente, acabando con la etapa de autoritarismo, de prepotencia y oscurantismo de la caverna. Por eso hemos apoyado las medidas de su Gobierno en esta nueva etapa. Porque, en mayor o en menor medida, hemos contribuido al cambio democrático y nos felicitamos por ello. Ahora queremos contribuir a un cambio de izquierdas.

Hemos apoyado el restablecimiento de buenas relaciones con el eje franco-alemán, con el mundo árabe y los países de América Latina, destrozadas por el Sr. Aznar.

Con nuestras propuestas y con nuestros votos nos hemos comprometido con esta nueva etapa y hemos apoyado en esta Cámara las medidas más significativas: la retirada de las tropas españolas de Irak; la regularización de los inmigrantes; y la Ley integral contra la violencia de género; la agilización del divorcio y los matrimonios entre personas homosexuales con derecho a adopción, un derecho que, por cierto, figuraba en nuestro programa electoral, pero no en el del PSOE.

La actitud insumisa de la jerarquía eclesiástica frente a esta decisión soberana del Parlamento, llamando a los servidores del Estado a la objeción de conciencia y a la desobediencia civil, entra en colisión con la democracia y la Constitución. Y es una involución de siglos en el desarrollo de nuestras sociedades. Sorprende comprobar que algunos líderes de la Iglesia Católica y algunos dirigentes políticos que les siguen han decidido que el nuevo discurso de la derecha debe estar fundado en el integrista religioso, en el extremismo moral y en la restauración autoritaria.

Esta actitud pone sobre el tapete la necesidad de avanzar en la separación entre el Estado y la Iglesia, denunciando los acuerdos con el Estado Vaticano y cumpliendo el compromiso de autofinanciación de la Iglesia, de manera que no fuese necesario que nadie marcara una cruz en su declaración de impuestos. No es la nuestra una respuesta anticlerical. Es una respuesta laica.

### **La estrategia de desestabilización del PP**

Desde el mismo momento en que constató su derrota electoral, el PP decidió desestabilizar al Gobierno hiciera lo que hiciera, al precio que fuere, incluso al precio de deslegitimar los resultados del 14 de Marzo y dar la razón a una potencia extranjera con la intolerable acusación de cobardía lanzada contra la mayoría de los españoles. Cada vez más esta estrategia de desestabilización del gobierno se confunde con una estrategia de desestabilización del régimen democrático, de sus bases de acuerdo, de sus reglas de juego compartidas. El PP representa el triste espectáculo de un partido neoconservador y extremista cada vez más incómodo en el sistema democrático.

Por mucho que el PP se empeñe en negar lo evidente, la investigación judicial y la Comisión parlamentaria del 11-M han confirmado hasta la saciedad que el único responsable de la matanza fue el terrorismo internacional de raíz islamista. La tesis de la supuesta autoría de ETA

no aparece por ninguna parte. Los ciudadanos tenían razón cuando acusaban al Gobierno anterior de mentirles descaradamente entre el 11 y el 14 de marzo de 2004.

Desde la misma noche electoral, la dirección del PP ha intentado presionar al nuevo Gobierno a través de poderes fácticos ajenos a la soberanía nacional: con EEUU en la política exterior; con el Estado Vaticano y la jerarquía eclesiástica en el campo educativo y de los derechos civiles; o con determinados medios que han dado pábulo a sus fabulaciones en relación con la matanza del 11 de marzo.

El PP ha puesto al servicio de su estrategia unos recursos que afectan al propio funcionamiento del Estado, como ha sido el bloqueo del poder judicial y, más recientemente, la instrumentación partidista del Pacto Antiterrorista o la amenaza de una supuesta ruptura de la unidad de España.

Este modelo de desestabilización es suicida para el PP como alternativa, pero provoca y enardece a sus sectores más extremos y polariza a la sociedad.

El PP ha optado por aislarse, confinándose en el extremismo, en una tentativa estéril de truncar la legislatura y tumbar al Gobierno. Frente a este intento de desestabilización, nosotros estaremos, como siempre lo hemos estado, confrontando con la derecha política y las políticas de derechas.

### **País Vasco**

La pregunta es: ¿queremos que haya paz en nuestro país, sí o no? El proceso abierto en el País Vasco no está permitiendo conocer con transparencia lo que ya era obvio hace tiempo: el PP usa el terrorismo con fines políticos; el PP no quiere la paz en el País Vasco porque la presencia de ETA le otorga réditos políticos.

Las elecciones vascas han abierto un nuevo ciclo político de expectativas y horizontes. Los resultados son el reflejo de una sociedad vasca compleja y plural, para la que ni el Estatuto de Gernika ni el Plan Ibarretxe son válidos y que requiere una reforma dialogada entre todos.

La nueva etapa va a requerir de todos nosotros un gran esfuerzo de diálogo para la gobernabilidad, para la reforma del Estatuto y para el proceso de paz, en el que nuestro Grupo está comprometido.

Usted tiene ahora una oportunidad histórica de conseguir la paz. No la desaproveche.

Para avanzar en este camino, proponemos la configuración de una Mesa estatal contra el terrorismo y por la paz, con participación de todas las fuerzas políticas democráticas, en paralelo y en colaboración con las Mesas que con ese mismo objetivo se están constituyendo en Navarra y en el País Vasco.

### **Modelo de Estado**

Vivimos en un estado que ha caminado hacia el federalismo pero que tiene miedo de reconocerse en esa palabra. Nosotros no. Nosotros estamos convencidos de que, a medio plazo, el Estado español será federal, o no será.

Proponemos que la reforma incorpore nuevos derechos de ampliación del Estado del Bienestar y desarrolle cauces de democracia participativa, que fomenten el renacimiento de la política y su acercamiento a la ciudadanía.

25 años después de la transición democrática, el proceso de reformas estatutarias y constitucionales no ha de ser contemplado como un riesgo, sino como una oportunidad. Como una oportunidad de desarrollar un modelo de Estado más democrático y solidario, más eficaz y más cercano a los problemas y necesidades de las personas.

Para nosotros, autonomía es sinónimo de solidaridad. El modelo autonómico ha sido el más solidario de la historia de España. Por eso nosotros queremos que sea más autonómico y municipal, más federal, más democrático y social. Más solidario.

### **Reforma fiscal**

La gente percibe que hasta ahora el Gobierno ha impulsado medidas sin coste. Pero las nuevas políticas sociales y la financiación autonómica y municipal exigen nuevos recursos. El Gobierno tiene que optar por el fortalecimiento del empleo y del Estado de Bienestar social. Y para eso hacen falta nuevos recursos, hace falta una reforma fiscal progresiva.

La última encuesta del CIS confirma que una abrumadora mayoría de españoles están dispuestos a hacer un esfuerzo fiscal para mejorar los servicios públicos esenciales, para mejorar el empleo, la educación y la sanidad pública. Es decir, señor presidente del gobierno: hay consenso social en reforzar nuestro estado del bienestar, en mejorarlo y potenciarlo. Y hay recursos y excedentes para hacerlo. Hacerlo o no es un ejemplo de coraje y voluntad política: ¿Qué decide usted?

El triste asunto del integrista Lamela en Madrid ha puesto de relieve que hay una mayoría de ciudadanos hartos de los ataques a las estructuras de nuestro bienestar universal.

¿Cómo vamos a financiar las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y la atención social a las personas, la educación, la sanidad? ¿Cómo vamos a financiar la nueva Ley contra la Violencia de Género? El aumento de la recaudación, la más alta de la historia, no será suficiente. Hace falta una reforma fiscal progresiva y un enfoque más flexible y razonable del déficit público.

En cualquier caso, queremos más autonomía para una mayor cohesión social y territorial, para un mejor desarrollo sostenible. Y queremos más progresividad fiscal para reforzar la solidaridad y corregir los desequilibrios sociales y territoriales.

Fue el PP quien quebró la solidaridad, cuando sus dos reformas fiscales injustas, que redujeron el tipo máximo del 56 al 45% y dieron prioridad a los impuestos indirectos, dejaron de ingresar en las arcas del Estado 1,3 billones de pesetas, en detrimento del gasto social.

Pero, a estas alturas, no se conoce la alternativa de reforma del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas que el Gobierno ha aplazado a 2007.

### **Ayuntamientos**

Porque creemos que los servicios públicos de calidad son una garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades, porque pensamos que la participación ciudadana enriquece la democracia y contribuye activamente a la búsqueda de soluciones, defendemos Ayuntamientos con financiación suficiente, claridad competencial y autonomía política. Los Ayuntamientos, necesitan una nueva ley de Haciendas Locales, un nuevo Pacto Local que incremente su participación en los tributos e ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

### **Ley Orgánica Electoral**

En esa nueva etapa de regeneración democrática que deseamos, consideramos imprescindible una **reforma de la Ley Orgánica Electoral** que amplíe el número de diputados y establezca una mayor proporcionalidad en la representación de una fuerza como la nuestra, que teniendo el (5) % de los votos tan sólo está representada en esta Cámara por el 1,5 % de los diputados. La Ley actual resulta claramente discriminatoria para los electores de la tercera fuerza política de España.

En las últimas elecciones las lecturas son inapelables: Hay sentado en este Congreso 1 diputado de Izquierda Unida o de Iniciativa per Catalunya Verds por cada 253.906 votos. Los del PSOE y los del PP, apenas han necesitado 65.000 votos de media para coger escaño. Por lo tanto el valor global de las papeletas de IU es 4 veces inferior al de los partidos mayoritarios.

Con un sistema proporcional mi Grupo tendría el triple de diputados y con un sistema corregido, el doble. Llenaríamos toda esta fila y habríamos intervenido hace 3 horas, justo después del Portavoz del Grupo Popular.

### **La debilidad del Ejecutivo ante las presiones de los poderes fácticos**

El 17 de abril de 2004 usted fue investido presidente del Gobierno con el único voto en contra del Partido Popular. Hoy, más un año después, el Gobierno aún no ha tomado las riendas del país y sigue situado en la indefinición política.

Hace un año los electores se pronunciaron por un cambio progresista, por un cambio hacia la izquierda.

Estos últimos tiempos, a los graznididos de la derecha política se han sumado en concierto los cantos de sirena de la derecha económica. Tenemos la impresión de que, como Ulises en La Odisea, usted ha empezado a ceder a sus encantos y presiones.

En un mitin celebrado el 24 de abril en Valencia, usted alardeaba de haber cumplido su palabra sin tener en cuenta las posiciones, los intereses y las presiones de determinadas instancias. Afirmó que *“el Gobierno ha sido firme y fuerte, ha sabido aguantar las presiones y así será hasta el final de la legislatura”*.

Se refería, o al menos así ha sido interpretado, a las presiones de la Iglesia, de EEUU y de diversos sectores de la derecha. Permítanme expresar ciertas dudas acerca de ese compromiso de firmeza, señalando tres ejemplos:

- La renuncia a la semana laboral de 35 horas y la aceptación negociar el abaratamiento del despido (ante la presión de la CEOE)
- El reconocimiento de la religión como asignatura de la educación pública (ante la presión de la Iglesia)
- Y el incremento de tropas en Afganistán para aliviar la presión de Estados Unidos

El caso es que, de un tiempo a esta parte, no estamos nada satisfechos con determinadas decisiones del Gobierno. Usted no ha cumplido sus compromisos de reforma laboral, de reforma fiscal y de abaratamiento de la vivienda. También se ha quedado a medio camino en el Plan Hidrológico Nacional -mitad agua, mitad cemento-, en el cumplimiento de las obligaciones de Kyoto y en materia de educación, formación e Investigación y Desarrollo. Y nosotros no estamos por el estancamiento. Estamos por el cambio.

Todavía no se vislumbra su alternativa de reforma laboral, porque emulando a Penélope, el señor Solbes desteje de noche lo que ha tejido de día el señor Caldera. No es compatible el

objetivo de acabar con la precariedad con abaratar el despido o retrasar la semana laboral de 35 horas.

En la **política económica** y en otras muy sustantivas, el Gobierno parece haber entrado en un compás de espera o, lo que sería peor, en un aplazamiento del cambio. Ya es hora de convertir el talante en compromiso político y social.

El núcleo de resistencia al cambio está en la continuidad de un modelo económico, ecológico y social insostenible. Y nadie ignora que del modelo económico se deriva el fiscal, el laboral, el social y el ambiental. El continuismo de una política económica basada en la precariedad laboral y la especulación del suelo, en un modelo productivo y energético intensivo, está convirtiendo el objetivo del giro social y de la protección del medio ambiente en la cuadratura del círculo, en un problema que de este modo no tendría solución.

El Gobierno ha subido un 6,6% el **Salario Mínimo Interprofesional**, después de haber perdido 5 puntos y medio de poder adquisitivo en los 8 años de gobierno del PP. Pero la promesa de asegurar su revalorización automática en función de la inflación real se tambalea. Las presiones del Sr. Cuevas y la falta de sintonía entre Economía y Trabajo han debilitado la credibilidad del Gobierno en esta materia.

El **mercado laboral** es la raíz de la vida diaria de la gente, porque del trabajo depende su bienestar o su precariedad. Y para que el objetivo de reducir la precariedad sea creíble, hace falta reformar el Estatuto de los Trabajadores, suprimiendo los actuales abusos del régimen de contratación.

Todavía existen en nuestro país miles de familias a las que no llega el **Estado de Bienestar**. Son aquellas que tienen en su seno a personas dependientes, que padecen discapacidades y enfermedades crónicas, a lo que hay que añadir el abandono de la atención de la salud mental. Hoy por hoy, todo el esfuerzo de atención que estas personas precisan recae en su casi totalidad sobre las mujeres. Su libertad requiere que rompamos esa cadena.

Por ello, esta etapa resulta decisiva para el desarrollo del cuarto pilar del Estado de bienestar social. No admitiremos retrasos ni rebajas en la futura **Ley de Autonomía Personal**, cuya financiación debería ser incluida en los Presupuestos Generales del estado para 2006 para asegurar sus primeras fases de implantación. Es fundamental que el proyecto de ley entre en la Cámara antes de octubre, para que repercuta en las previsiones presupuestarias y sus primeras medidas puedan implantarse a partir de 2005. Una ley estatal de esta envergadura, que afecta a 2.700.000 personas, debe ser negociada con las Comunidades Autónomas, sin cuya plena implicación política y jurídica se vería condenada al fracaso.

Un Gobierno progresista no puede olvidar a los menos favorecidos. El **Plan de lucha por la Inclusión Social**, al que obliga la Unión Europea, y el **Plan de apoyo a las familias**, están prácticamente abandonados. Por eso le invitamos a adoptar iniciativas eficaces contra la pobreza y la exclusión social, que todavía son una realidad no solo a escala internacional, sino en nuestro propio país.

Tampoco está claro qué va a hacer el Gobierno para mejorar la financiación de la **Sanidad** y seguir reduciendo el gasto farmacéutico. Da la impresión de que también va a utilizar las dos manos: con la izquierda va a proponer una cesta de impuestos indirectos y con la derecha va a permitir a las Comunidades Autónomas el recurso a mecanismos de cofinanciación e incluso de copago que pondrían en peligro la gratuidad de los servicios sanitarios.

En materia **educativa**, el proyecto de Ley Orgánica de Educación puede crear un espejismo de progresía por cuanto modifica una ley tan nefasta como la LOCE. En realidad, es un refrito de la ley del PP y supone un retroceso respecto a la situación anterior, cediendo a los intereses

particulares de la educación privada. Para que tenga credibilidad, debe estar respaldada por una financiación suficiente y ser enmendada en profundidad, para garantizar impulsar la participación y dar un apoyo decidido a la escuela pública frente a la desviación de clientela que el PP impulsó a través de los conciertos educativos con la privada.

Si hay algo que solivianta es la penuria financiera que viene padeciendo la escuela pública, y las políticas de concierto con los centros privados sin control público. ¿Por qué se obliga a los alumnos, curso tras curso, a tragarse asignaturas inventadas artificialmente para que una parte siga atendiendo la religión católica?

No olvidemos que España registra todavía uno de los índices de fracaso escolar más altos de Europa, y el más bajo de maestros por alumno.

Por todo ello, la escuela pública, laica y de calidad, es nuestro compromiso.

Si hay algo que solivianta es la negativa de algunos centros concertados a acoger a alumnos inmigrantes, obligándoles a concentrarse casi exclusivamente en la escuela pública. La presencia de más de 400.000 alumnos de origen inmigrante requiere inversiones en recursos humanos y didácticos para garantizar una educación integradora y respetuosa de la diversidad.

Los inmigrantes han venido para quedarse. O reinventamos con ellos la sociedad, o su integración ciudadana será muy difícil en los años venideros.

El 7 de mayo terminó el período de **regularización de inmigrantes**, que nosotros hemos querido que se ampliara en 90 días. El cierre abrupto del plazo ha dejado fuera a una parte de los solicitantes. Sin embargo, valoramos el esfuerzo del Ejecutivo, que ha contado con el apoyo de numerosos empresarios, sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales, para desarrollar este proceso.

En el proceso de globalización en curso, la distribución desigual de la riqueza empuja y seguirá empujando hacia España un considerable flujo de personas procedentes de países y continentes menos desarrollados que el nuestro. Habría que reformar la **Ley de Extranjería** para ampliar los derechos fundamentales de los inmigrantes y adecuar la norma a las dimensiones de este fenómeno pues, de lo contrario, nuestro país se verá abocado a desarrollar periódicamente Planes especiales de regularización.

Pero una **política de integración** digna de ese nombre y propia de un Estado moderno, con respeto a los derechos fundamentales de las personas, requiere nuevos instrumentos legales, administrativos y financieros. Estamos convencidos de que no hay igualdad de derechos sociales sin derechos políticos.

En esta legislatura, por primera vez, tenemos la posibilidad de que la mayoría parlamentaria apruebe ese reconocimiento, al menos extendiendo a todos los residentes extranjeros el derecho de voto en las elecciones municipales y europeas, un derecho del que ya disfrutaban los nacionales de los demás países de la Unión Europea afincados en España.

La aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género ha supuesto un paso muy importante pero que requiere una financiación adecuada para ser plenamente eficaz.

Por ello es fundamental que esta Ley sea financiada en todos sus aspectos sociales. El Gobierno debería promover convenios de colaboración con las CCAA y la Federación de Municipios y Provincias para su financiación y puesta en marcha.

El mundo de los **jóvenes** es muy distinto a la imagen idílica que proyecta la publicidad. El mercado sólo ofrece empleo a un tipo de joven “*bueno, bonito y barato*”, con un salario que en

promedio no llega a 90.000 pesetas al mes. La juventud está marcada a fuego por la precariedad laboral y el precio prohibitivo de la vivienda, que retrasan su emancipación. Ha pasado un año y usted les ha fallado porque no ha cumplido ninguno de estos dos compromisos. Ha pasado un año y no se ha dado una solución duradera a los becarios de investigación. Escuche al Senado, que acaba de solicitar un Plan de Vivienda Joven, por iniciativa de Izquierda Unida.

La política de **vivienda** ha sido hasta ahora el talón de Aquiles del Gobierno por insuficiente, confusa y manifiestamente mejorable. El Gobierno ha desarrollado con escaso éxito una política de imagen, huérfana de propuestas serias. No hay alternativa de suelo y vivienda, más allá de algunas cesiones de suelo público, algunas declaraciones contradictorias y algunas “ocurrencias” como las soluciones habitacionales de 30 metros cuadrados.

Sr. Presidente, el 5 de marzo de 2004, desde el salón de actos del CSIC, usted presentó su programa de Gobierno en **Investigación y Desarrollo** y su apuesta por convertir la investigación científica y el desarrollo tecnológico en cuestiones clave de su Gobierno. Desde nuestro Grupo valoramos entonces muy positivamente ese compromiso, que se convirtió en un elemento básico para decidir nuestro apoyo parlamentario. Pero su Gobierno no ha sido capaz de dar contenido a esas promesas.

Por ello, hay que multiplicar los recursos asignados a Investigación, Desarrollo e innovación, si queremos cumplir los compromisos del cambio y situar a España en condiciones de afrontar los retos de un futuro que llama a la puerta.

Lo mismo ocurre en relación al **Medio ambiente**. Se ha retirado el Plan Hidrológico Nacional, pero el gobierno no impulsa una nueva Cultura del Agua, basada en la gestión de la demanda. Se rechaza el trasvase del Ebro, pero se mantiene el del Júcar-Vinalopó. Y la Sra ministra de Fomento no entiende la palabra “*sostenibilidad*”, porque si la entendiera, no hubiera presentado un Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte que resulta incomprensible desde el punto de vista ambiental.

La actual política energética e industrial nos aleja de los compromisos de Kyoto. Para ello habría que incrementar las fuentes de energía renovables, reduciendo el consumo de energía fósil, de petróleo y de gas, así como la dependencia de la energía nuclear. Por ejemplo, ¿Por qué el Sr. Ibarra se empeña en conceder al Sr. Gallardo la instalación de una refinería de petróleo en plena zona agrícola extremeña? Nuestro país ya está un 46% por encima de la base de emisiones de 1990, cuando en 2012 debemos estar en tan solo el 15%. Por ese camino, Sr. Presidente, no va a ser fácil reducirlas del 46 al 15% para cumplir nuestros compromisos. También habrá que tenerlo en cuenta en una próxima reforma ecológica de la fiscalidad.

Instamos al Gobierno para que traiga cuanto antes al Congreso el proyecto de ley de Responsabilidades por Daños Ambientales, en aplicación de una Directiva europea, y la propuesta de creación de una Fiscalía Especial para los Delitos Ecológicos.

Para que no vuelva a repetirse una catástrofe ecológica como la que originó el hundimiento del Prestige, será necesario aplicar todas las medidas preventivas que preconiza la Unión Europea.

Hace 60 años que España no padecía una sequía como la de este año, situando la escasez de agua como un problema de Estado. La temperatura media ha aumentado un grado y medio en los últimos 30 años, síntoma del impacto del cambio climático en nuestro país.

En agricultura es muy importante encabezar la lucha contra el cultivo de transgénicos y la defensa clara de la agricultura y ganadería ecológica.

### **España en la Unión Europea**

La Unión Europea está inmersa en una profunda crisis de legitimidad como consecuencia de las políticas neoliberales que están causando verdaderos estragos sociales. Somos partidarios de más Europa, pero de otra Europa, basada en la defensa del estado de bienestar y el modelo social europeo. Las dificultades que se observan en Francia y en otros países para la ratificación del Tratado Constitucional muestran la necesidad de una clara orientación progresista y de izquierdas para reconducir el proceso de construcción europeo.

Desde nuestro compromiso europeísta, apostamos por un modelo de construcción europea basado en la defensa y ampliación de las conquistas sociales, del modelo social europeo que está siendo atacado por las políticas neoliberales, como la directiva Bolkestein, o el propio déficit democrático de las instituciones europeas. Creemos que España debe contribuir a vertebrar una respuesta progresista al proyecto neoliberal europeo que hoy ha entrado en crisis.

Las negociaciones sobre las perspectivas financieras son esenciales a dos niveles: para orientar nuestro modelo económico y social para hacerlo más productivo y equitativo; y para asegurar un margen de transición de los fondos que reciben las regiones más pobres de España.

El Gobierno tiene todo nuestro apoyo para negociar en Bruselas una transición suave que compense a España por la pérdida de fondos a partir de 2007 y garanticen que nuestro país y sus Comunidades Autónomas no los pierdan de forma abrupta, aún siendo conscientes de que, como consecuencia del crecimiento de renta, estamos en una fase de transición desde una situación de país receptor a otra muy distinta como país contribuyente neto.

### **Cooperación al Desarrollo**

Reconocemos los avances que se han producido en este año en el campo de la cooperación al desarrollo y valoramos positivamente la creación de la SECI.

Conviene recordar que la dotación prevista en el Presupuesto para este año fue aumentado a propuesta de nuestro Grupo parlamentario, cuyo objetivo sigue siendo el de alcanzar el 0,7%. Nuestro país debe comprometerse a fondo con la Declaración de objetivos del Milenio, aprobada por la Asamblea general de la ONU en el 2000 para erradicar la pobreza, promover la dignidad humana, la igualdad, la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Hoy más de 3.000 millones de personas carecen de una vida digna a causa de la pobreza. Hambre, sida, analfabetismo, discriminación de las mujeres, conflictos bélicos... son algunos de los ejemplos de una injusticia que sufre la mayoría de la población mundial.

### **Política exterior**

Hemos creído observar un giro en la política del Gobierno en relación con el futuro del **Sahara Occidental**, en el sentido de una aproximación a las posiciones anexionistas del Reino de Marruecos, contrarias a la legalidad internacional. Ese cambio, si es que existe, iría en contra de la política mantenida por todos los gobiernos de la democracia y en contra de la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en múltiples mociones aprobadas por esta Cámara. En nuestra opinión, el gobierno debe mantener los compromisos de Estado adquiridos como Administración responsable del territorio. La voluntad de cooperación con el vecino Reino de Marruecos debe ser compatible con esa responsabilidad. El Gobierno español debe mantener su apoyo al legítimo derecho de autodeterminación del pueblo saharauí, en cumplimiento de las propias resoluciones de la ONU y conforme al derecho internacional. La pretensión de las autoridades marroquíes de impedir al pueblo saharauí el libre ejercicio de este derecho a cambio de una hipotética autonomía, carece de toda credibilidad cuando el Reino de Marruecos prohíbe los partidos políticos regionales y mantiene una férrea estructura centralista. España debería seguir el ejemplo que dio Portugal con su apoyo al referéndum de Timor Este.

El Sr. Moratinos ha dedicado siempre una especial atención al proceso de Paz en **Oriente Próximo**. Le brindamos nuestro apoyo en el objetivo de avanzar hacia la Paz en el conflicto entre Israel y Palestina, mediante la retirada de tropas israelíes de Gaza y Cisjordania y la proclamación de un Estado palestino con fronteras garantizadas por Naciones Unidas.

España puede y debe jugar un papel relevante en la cooperación con los pueblos de **América Latina**. Y esos pueblos han trazado nuevos horizontes. Han decidido libremente, a través de las urnas, emprender la lucha contra el hambre y la desigualdad. Así entendemos la elección de presidentes progresistas como Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Lagos en Chile, Chávez en Venezuela o Tabaré en Uruguay. Reclamamos al gobierno español una posición en la UE que defina y ponga en práctica una política propia respecto a Cuba. Una política independiente y desmarcada de la que impulsan al respecto los EEUU.

Las inversiones españolas en América Latina alcanzan ya el 6% de nuestro Producto Interior Bruto. Estas inversiones pueden representar una contribución importante al progreso económico del continente, a condición de que nuestra presencia no sea pasajera, sino estructural y, sobre todo, compatible con la soberanía nacional de aquellos países hermanos.

Sin embargo, la nueva política hacia América Latina está siendo cuestionada por el ministro de Defensa y el ministro de Justicia. Y, de manera general, la política exterior está siendo enmendada por la política militar y el Sr. Bono le hace sombra al Sr. Moratinos.

La nueva Directiva de Defensa Nacional dice textualmente que “*compartimos con EEUU los mismos principios y valores*”. Eso es falso. El gobierno que se negó a firmar el Protocolo de Kyoto y a apoyar al Tribunal Penal Internacional; el gobierno que pone dificultades al Tratado de París para la supresión de las armas bioquímicas; el gobierno de la guerra de Irak, de Abu Ghraib y de Guantánamo; está en las antípodas de nuestros valores.

Por el contrario, apoyamos una política decidida de defensa de los Derechos Humanos desde una visión universal, y no selectiva. No se puede exigir su cumplimiento en Cuba y olvidarse de ella en Colombia, con violaciones mucho más graves, o en Guantánamo y Abu Ghraib en el caso de EEUU.

El balance de las misiones militares emprendidas en Haití y en Afganistán, sin nuestro apoyo, está siendo un auténtico desastre. Le pedimos, Sr. Presidente, que de la orden de regreso de nuestras tropas a España.

El anuncio del Sr. López Aguilar de un próximo acuerdo con EEUU y Colombia contra el terrorismo internacional no deja de ser sorprendente, por cuanto la Administración Bush acaba de aprobar acciones encubiertas, con capacidad de secuestrar y eliminar al margen del derecho internacional; y cuando el presidente Uribe promueve una reforma constitucional para la eliminación de la insurgencia mediante la supresión de las garantías constitucionales.

El Gobierno ha iniciado un peregrinaje a EEUU que más bien parece un viaje a Canosa. Aún reconociendo en sus justos términos la importancia de nuestras relaciones con los EEUU, el espectáculo es patético. Parece como si el porvenir de España se midiera por el arqueado de cejas de cada interlocutor estadounidense. Esperamos que este objetivo no se convierta en una obsesión, desde la seguridad que nos proporciona nuestra pertenencia a la UE y nuestra cercanía al eje franco-alemán. Como usted sabe, la política del presidente Bush es “*Conmigo o contra mí*”. No ceda a sus presiones ni a sus exigencias si van contra los intereses de nuestro país.

Nos preocupa sobre todo la cesión que el Gobierno se dispone a hacer a EEUU en la utilización de la base de Rota como base antiterrorista de fuerzas especiales y plataforma de ataques militares aéreos y navales en Oriente Medio, como un santuario al margen del Derecho Internacional. Rota no debe ser el Guantánamo español. Esto supondría un peligro para nuestra

seguridad al hacernos participar indirectamente en guerras o acciones encubiertas e ilegales. Por ello, exigimos que se produzca una votación explícita del Parlamento sobre este asunto, porque esa decisión va mucho más allá de lo previsto en los acuerdos de Defensa que rubricó el Gobierno de Felipe González en 1987.

Consideramos, Sr. Presidente del Gobierno, que una política progresista de acercamiento a los EE UU es posible y conveniente, sin necesidad de hacer este tipo de concesiones contrarias a nuestros intereses.

Esa política ambigua y vacilante, le aleja del impulso del cambio y del movimiento social que le aupó al gobierno. Si continúa por ese camino, nosotros que hemos sido una fuerza impulsora del cambio, seremos aún si cabe más exigentes para que se cumpla el programa del cambio y para que el Gobierno no ceda a la presión de la derecha económica y política.

En su voluntad de complacer a unos y otros, con el mejor talante, el Gobierno todavía no ha definido un verdadero proyecto político. Vivimos un escenario de cierta confusión, en la línea política y también en la política de alianzas.

Bien es cierto que a la confusión del Gobierno se une su necesidad de pactar, aunque a veces se le olvide que no tiene mayoría absoluta en el Congreso y tampoco en el Senado.

Y sin embargo no acaba de definirse una política alternativa de izquierdas. El Gobierno está en tierra de nadie, entre la continuidad el cambio.

Si usted alberga alguna duda en esta encrucijada del camino, Sr. Presidente del Gobierno, nuestro Grupo quiere ayudarle a que se decida por el cambio.

Y el cambio para nosotros se mide caminando en la siguiente dirección:

- La reforma laboral frente a la precariedad, generalizando el empleo digno y de calidad, reforzando la inspección y la sanción frente al fraude de la contratación temporal. La reforma del Estatuto de los Trabajadores, el establecimiento de una ley que limite la subcontratación. Y la concertación entre las Administraciones para rebajar la precariedad a la mitad.
- La mejora del Estado de bienestar social y ambiental, con un modelo de desarrollo sostenible.
- La construcción de un modelo de Estado transparente y participativo, propio de una democracia avanzada y de orientación federal, basado en la autonomía política, la financiación suficiente y la solidaridad.
- Contribuyendo activamente a la construcción de otra Europa, más social y democrática.
- Y consolidando el camino emprendido hacia la paz, la alianza de civilizaciones y un nuevo orden económico y político más justo y equitativo a escala internacional.

### **Propuestas finales**

El año transcurrido ha sido el año de la Restauración democrática. El próximo período debe ser de Regeneración y de Cambio de izquierdas. Estas son las prioridades que proponemos para esta nueva fase:

#### **1) Empleo y pensiones dignas**

- Reforma laboral frente a la precariedad laboral. Reforma del Estatuto de los Trabajadores. Ley de subcontratación. Reforzamiento de la inspección y sanción frente al fraude. Reducción de la semana laboral a 35 horas por ley, sin merma salarial.
- Un Plan industrial del Estado que defina el papel del sector público, frene la privatización y la deslocalización productiva.

## 2) Salud laboral y prevención de los accidentes de trabajo

La salud laboral debe formar parte de la salud pública general. Para protegerla es necesario mejorar las condiciones de trabajo y, sobre todo, facilitar los recursos necesarios para que las leyes se cumplan. Por eso proponemos:

- El libre acceso a todas las empresas de los responsables sindicales de Salud laboral y seguridad.
- En el establecimiento de hechos constitutivos de infracción, las actuaciones de los técnicos de prevención de las CCAA tendrán los mismos efectos que las de los inspectores de trabajo.
- Queremos que se penalice en un 30% las cotizaciones a la seguridad social de las empresas cuyo índice de siniestralidad supere en un 50% el de la media del sector.

## 3) Estado del bienestar digno y sostenible

- Una **reforma fiscal progresista** que mejore la progresividad de las rentas del trabajo y del capital, que aumente la presión en las grandes fortunas y patrimonios, que luche enérgicamente contra el fraude y la evasión fiscal y las prácticas de ingeniería financiera que permiten el incumplimiento de las obligaciones fiscales, todo ello con el fin de aportar los recursos necesarios para las nuevas políticas sociales, autonómicas y municipales.
- La presentación inmediata de un proyecto de **Ley de Dependencia** que reconozca como derecho subjetivo y universal la cobertura social de las personas dependientes, con calendario preciso de aplicación a partir de 2005 y financiación inicial por la Seguridad Social.
- Una **Ley de Educación** que asegure la gratuidad y profundice en la oferta pública educativa. Una Ley de Financiación suficiente de la educación pública y la creación de un Fondo de Compensación para eliminar las desigualdades educativas en las Comunidades Autónomas. Gratuidad de libros y material didáctico en los centros públicos. Incremento sustancial de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil.
- Una ley básica de **Rentas Mínimas**, con vistas al reconocimiento posterior de la **Renta Básica de Ciudadanía** que garantice a todas las personas una vida con dignidad.
- Un buen Acuerdo de financiación de la Sanidad con las Comunidades Autónomas y un mayor control del gasto farmacéutico.

## 4) Más desarrollo sostenible

- La central nuclear de Zorita cerrará en 2006. Ahora hace falta un calendario de cierre de las demás, siguiendo el modelo alemán y empezando por las de Garoña y Almaraz.

## 5) Vivienda

- La **Penalización fiscal de las viviendas vacías**, con el fin de frenar la especulación y estimular el mercado de alquiler: cuota equivalente al 100% del IBI a partir del primer año; 200% del IBI en el caso de que se posean dos viviendas y tres veces el IBI cuando se posean tres o más viviendas (no se contabilizarán los tiempos destinados a rehabilitación hasta un máximo de 9 meses)

## 6) Igualdad de género

- La Ley de Igualdad debe ser sustanciada con una financiación suficiente.

## 7) Derechos civiles y políticos

- La Reforma, en esta legislatura, de la **Ley Orgánica del Régimen Electoral** que garantice una mayor proporcionalidad de representación en el Congreso y en los Parlamentos Autonómicos, donde debe bajarse el listón al 3%, en vez del 5% vigente en Cantabria o el 8% en Castilla-La-Mancha, donde el PSOE gobierna.
- La Reforma a fondo de la **Ley de Extranjería**, pasando del enfoque de gestión reglamentaria de flujos migratorios a una base jurídica estable para una política moderna de integración. Reconocimiento del derecho de voto de los extranjeros residentes en España en las elecciones locales y europeas

## 8) Reformas estatutarias y Municipalismo

- El Apoyo a las reformas de los Estatutos de Autonomía, que profundice en el autogobierno, la participación democrática y el progreso social, la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad.
- Una nueva Ley de Haciendas Locales que garantice la suficiencia financiera de nuestros Ayuntamientos, salde la deuda histórica y desarrolle el acuerdo vigente entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno en la compensación del Impuesto de Actividades Económicas.

## 9) Un nuevo Pacto Antiterrorista y por la Paz con participación de todas las fuerzas democráticas.

## 10) Laicidad

- La Supresión de toda enseñanza confesional en la Educación pública en horario lectivo.
- La Aplicación de los acuerdos para la autofinanciación de la Iglesia Católica

## 11) Comunicación

- Una Reforma duradera de RTVE como servicio público, creación del Consejo de Comunicación Audiovisual y del estatuto del Periodista.

## 12) Política Exterior

- La denuncia de las Bases militares de utilización conjunta con EEUU y el rechazo a la instalación de unidades especiales estadounidenses en la base de Rota.

- El mantenimiento de los compromisos de Estado adquiridos como Administración responsable del Sahara Occidental, prestando pleno apoyo al legítimo derecho de autodeterminación del pueblo saharauí.
- El incremento de la cooperación y la condonación de la Deuda externa a los países menos adelantados, especialmente del África Subsahariana., así como la reforma y traspaso del Instrumento FAD a la Secretaría de Estado de Cooperación.

Esta es la Hoja de Ruta que proponemos para ese giro a la izquierda. Éstas son nuestras prioridades para el próximo año legislativo. Queremos que el Gobierno se comprometa en un calendario para su cumplimiento y con un compromiso de financiación en los Presupuestos Generales del Estado para 2006. Para que la agenda del Estado sea también la agenda de la sociedad.

Nuestra actitud hacia el Gobierno dependerá también del grado de cumplimiento de los compromisos acordados en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para este año y, muy concretamente, con el programa legislativo y la Agenda Social. Es el aval que exigimos antes de negociar los Presupuestos del año próximo, antes de su presentación en octubre. Negociar es incluir compromisos que se recojan en el proyecto de ley, no en las enmiendas puntuales y a toro pasado.

Transcurrido un año, ha pasado el tiempo de gracia y llega el tiempo de la exigencia. Usted se encuentra en una encrucijada y da la sensación de no tener claro hacia donde va, de no saber qué quiere y cómo lo quiere. Tiene que escoger entre el continuismo o el cambio. Ahora debe pasar de los gestos a los hechos; de la duda a la acción. De los guiños a las miradas. De mirar a la derecha a trabajar con la izquierda.

Lo decimos desde las expectativas de los movimientos sociales, desde las aspiraciones de los votantes que se pronunciaron por el cambio el 14 de marzo de 2004 y desde la voluntad expresada por ellos en las movilizaciones sociales de los meses precedentes, las mayores en la historia de nuestro país. Esa es la legitimidad en la que debe apoyarse una política de izquierdas, una segunda transición que amplíe los derechos sociales.

Si quiere una mayoría de izquierdas, para una política de izquierdas, para un giro social, entonces podrá contar con nuestro apoyo, en el Parlamento y en la sociedad. Si quiere una alianza de izquierdas, con un programa de izquierdas, aquí nos tiene. Porque con ustedes, hemos sido protagonistas del programa del cambio. Y este es el momento del cambio. ¿Se atreve usted a promoverlo? Nosotros nos atrevemos. ¿Se atreve usted?

